

3. CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

USO DE PERROS ENTRENADOS PARA DETECTAR DROGAS – CAUSA PROBABLE

UTILIZACIÓN DE PERROS ENTRENADOS Y CAUSA PROBABLE

JORGE CABRERA GUIRAO*

En esta reciente decisión unánime de la Corte Suprema de los Estados Unidos, redactada por la Jueza Elena Kagan, se revirtió una decisión de la Corte Suprema del Estado de Florida¹, disponiéndose que las alertas de un perro entrenado en la detección de narcóticos, por sí solas, resultan suficientes para proveer de antecedentes suficientes para determinar la existencia de *causa probable*², el estándar constitucional necesario para proceder al registro el automóvil de una persona sin una orden judicial. Así, la decisión comentada dispone que requerir un acabado historial de aciertos y desaciertos de un perro que da la alerta como requisito a fin de que éstas puedan ser consideradas *causa probable*, importaría desnaturalizar al análisis de la “totalidad de las circunstancias”³, rigidizándolo, contra lo resuelto previamente en *Illinois v. Gates*, 462 U. S. 213, 235⁴.

* Magister en Derecho de la Universidad de Pennsylvania.

¹ Ver *Harris v. State*, 71 So.3d 756 (2011).

² Estándar requerido para proceder al registro de una persona, sus pertenencias o lugares respecto de los que tiene una expectativa razonable de privacidad. La cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América dispone: “*The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized*”. (“No se violará el derecho del pueblo a la seguridad en sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra allanamientos e incautaciones fuera de lo razonable, y no se emitirá ningún Mandamiento judicial para el efecto, si no es en virtud de causa probable, respaldada por Juramento o promesa, y con la descripción en detalle del lugar que habrá de ser allanado y de las personas o efectos que serán objeto de detención o incautación”).

³ Conforme a lo resuelto en el análisis de los hechos que configuran el estándar de causa probable, debe considerar la totalidad de las circunstancias atendiendo a la “*justa probabilidad*” en base a la que actúa una “*persona razonable*”.

⁴ En dicho fallo se dispuso que en la determinación de la existencia del estándar de causa probable deberá hacerse en atención a la totalidad de las circunstancias y que dicho estándar es casuístico y no está sujeto a reglas rígidas.

El caso fue conocido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en consideración a que se sostuvo que la sentencia de la Corte Suprema del Estado de Florida habría infringido el precedente establecido respecto en *Illinois v. Caballes*, 543 U.S. 405, 410 (2005) respecto del establecimiento de *causa probable* a través de alertas dadas por perro entrenados para la detección de narcóticos. La decisión que comentamos fue alegada el mismo día que un caso muy similar también referido a alerta de perros entrenados en la detección de narcóticos, pero esta vez respecto del registro del domicilio de una persona⁵.

En este caso, la Corte Suprema del Estado de Florida sostuvo que de no existir historiales de desempeño del perro que da la alerta, incluyendo datos de falsos positivos, dichas alertas nunca podrían ser suficientes para configurar causa probable, toda vez que la confiabilidad de dichos indicios debe sostenerse en un amplio espectro de prueba que dé cuenta de su confiabilidad y no puede derivarse solamente del hecho que el perro haya sido entrenado⁶.

⁵ *Florida v. Jardines*, 569 U.S. (2013). La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en este caso, fue dividida y los fundamentos de la opinión de mayoría redactada por el Juez Antonin Scalia son, además, diferentes y dicen relación a la protección de la propiedad privada, más que con la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

⁶ “[...] We hold the fact that a drug-detection dog has been trained and certified to detect narcotics, standing alone, is not sufficient to demonstrate the reliability of the dog. To demonstrate that an officer has a reasonable basis for believing that an alert by a drug-detection dog is sufficiently reliable to provide probable cause to search, the State must present evidence of the dog’s training and certification records, an explanation of the meaning of the particular training and certification, field performance records (including any unverified alerts), and evidence concerning the experience and training of the officer handling the dog, as well as any other objective evidence known to the officer about the dog’s reliability [...]” (“Resolvemos que el hecho que un perro entrenado en la detección de drogas haya sido entrenado y certificado para la detección de narcóticos, por sí solo, no es suficiente para demostrar la confiabilidad del perro. Para demostrar que un oficial ha tenido bases razonables para creer que una alerta dada por un perro entrenado en la detección de drogas es suficientemente confiable para proveer causa probable para el registro, el Estado debe presentar evidencia del entrenamiento del perro y sus registros de certificación, una explicación del significado del particular entrenamiento y certificación, registros de desempeño en campo (incluyendo cualquier alerta no verificada), y evidencia respecto a la experiencia y entrenamiento del oficial que maneja al perro, así como cualquier otra evidencia objetiva conocida al oficial respecto de la confiabilidad del perro [...]”).

Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la determinación de la concurrencia del estándar constitucional de *causa probable* deberá evaluar la *totalidad de las circunstancias*⁷, un estándar que impone la revisión de los antecedentes caso a caso, sin reglas fijas, más allá de atender a la justa probabilidad con que una persona razonable actúa. Esto no habría ocurrido en el análisis de la Corte Suprema del Estado de Florida. De acuerdo a lo sostenido en la decisión comentada, la Corte Suprema del Estado de Florida mecaniza un criterio que ha sido tradicionalmente laxo y casuístico al requerir mantener registros del desempeño de campo del perro para determinar su confiabilidad. De este modo, se desatendería el precedente respecto de la apreciación de los criterios de determinación de existencia de causa probable contenido en *Illinois v. Gates* y, por ello, se revierte la decisión impugnada.

Debido a lo anterior, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que, si no se ha desacreditado la prueba producida por el Estado respecto de la suficiencia del entrenamiento del perro, entonces habrá *causa probable*. La decisión que comentamos se produce en el contexto del debate respecto de la confiabilidad de las alertas dadas por perros entrenados en la detección de narcóticos y la influencia de quien lo utiliza⁸. Se ha considerado que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos desestima estas preocupaciones, sin embargo, dicha opinión debe matizarse pues la decisión señala formas de desacreditar la suficiencia del entrenamiento del perro que de haberse verificado en el caso podrían haber llevado a un análisis distinto respecto de la concurrencia de *causa probable*.

⁷ *Illinois v. Gates*, 462 U. S. 213, 235.

⁸ Ver SHOEBOTHAM, Leslie A., Off the Fourth Amendment Leash?: Law Enforcement Incentives to Use Unreliable Drug-Detection Dogs (January 16, 2013). 14 *Loyola Journal of Public Interest Law* 251 (2013); *Loyola New Orleans Law Research Paper* N° 2013-03. Disponible en: <http://ssrn.com/abstract=2201833>.

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

Syllabus**

FLORIDA v. HARRIS

Certiorari to the supreme court of florida

N° 11-817. Argued October 31, 2012 -
Decided February 19, 2013

Officer Wheatley pulled over respondent Harris for a routine traffic stop. Observing Harris’s nervousness and an open beer can, Wheatley sought consent to search Harris’s truck. When Harris refused, Wheatley executed a sniff test with his trained narcotics dog, Aldo. The dog alerted at the driver’s-side door handle, leading Wheatley to conclude that he had probable cause for a search. That search turned up nothing Aldo was trained to detect, but did reveal pseudoephedrine and other ingredients for manufacturing methamphetamine. Harris was arrested and charged with illegal possession of those ingredients. In a subsequent stop while Harris was out on bail, Aldo again alerted on Harris’s truck but nothing of interest was found. At a suppression hearing, Wheatley testified about his and Aldo’s extensive training in drug detection. Harris’s attorney did not contest the quality of that training, focusing instead on Aldo’s certification and performance in the field, particularly in the two stops of Harris’s truck. The trial court denied the motion to suppress, but the Florida Supreme Court reversed.

It held that a wide array of evidence was always necessary to establish probable cause, including field-performance records showing how many times the dog has falsely alerted. If an officer like Wheatley failed to keep such records, he could never have probable cause to think the dog a reliable indicator of drugs.

Held: Because training and testing records supported Aldo’s reliability in detecting drugs and Harris failed to undermine that evidence, Wheatley had probable cause to search Harris’s truck. Pp. 5-11.

(a) In testing whether an officer has probable cause to conduct a search, all that is required is the kind of “fair probability” on which “reasonable and prudent [people] act”. *Illinois v. Gates*, 462 U. S. 213. To evaluate whether the State has met this practical and common-sensical standard, this Court has consistently looked to the totality of the circumstances and rejected rigid rules, bright-line tests, and mechanistic inquiries. *Ibid.*

The Florida Supreme Court flouted this established approach by creating a strict evidentiary checklist to assess a drug-detection dog’s reliability. Requiring the State to introduce comprehensive documentation of the dog’s prior hits and misses in the field, and holding that absent field records will preclude a finding of probable cause no matter how much other proof the State offers, is the antithesis of a totality-of-the-circumstances approach. This is made worse by the State Supreme Court’s treatment of field-performance records

** El presente *syllabus* no tiene no es parte de la decisión de la Corte, sino que sólo un resumen de la misma sin fuerza legal.

as the evidentiary gold standard when, in fact, such data may not capture a dog's false negatives or may markedly overstate a dog's false positives. Such inaccuracies do not taint records of a dog's performance in standard training and certification settings, making that performance a better measure of a dog's reliability. Field records may sometimes be relevant, but the court should evaluate all the evidence, and should not prescribe an inflexible set of requirements.

Under the correct approach, a probable-cause hearing focusing on a dog's alert should proceed much like any other, with the court allowing the parties to make their best case and evaluating the totality of the circumstances. If the State has produced proof from controlled settings that a dog performs reliably in detecting drugs, and the defendant has not contested that showing, the court should find probable cause. But a defendant must have an opportunity to challenge such evidence of a dog's reliability, whether by cross-examining the testifying officer or by introducing his own fact or expert witnesses. The defendant may contest training or testing standards as flawed or too lax, or raise an issue regarding the particular alert. The court should then consider all the evidence and apply the usual test for probable cause—whether all the facts surrounding the alert, viewed through the lens of common sense, would make a reasonably prudent person think that

a search would reveal contraband or evidence of a crime. Pp. 5-9.

(b) The record in this case amply supported the trial court's determination that Aldo's alert gave Wheetley probable cause to search the truck. The State introduced substantial evidence of Aldo's training and his proficiency in finding drugs. Harris declined to challenge any aspect of that training or testing in the trial court, and the Court does not consider such arguments when they are presented for this first time in this Court. Harris principally relied below on Wheetley's failure to find any substance that Aldo was trained to detect. That infers too much from the failure of a particular alert to lead to drugs, and did not rebut the State's evidence from recent training and testing. Pp. 9-11.

71 So. 3d 756, reversed.

Kagan, J., delivered the opinion for a unanimous Court.

NOTICE: This opinion is subject to formal revision before publication in the preliminary print of the United States Reports. Readers are requested to notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Washington, D. C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that corrections may be made before the preliminary print goes to press.

Supreme Court of the United States.

Nº 11-817.